**Pregunta 1**. Sírvase proporcionar información sobre el estado del **borrador de iniciativa de la Ley General de Agua**s y describir las medidas tomadas o los esfuerzos que se han hecho para adoptar el borrador de la Ley General de Aguas, incluyendo información sobre (1) la ruta de cinco etapas para la creación de una Ley General de Aguas, establecida por las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento, de Recursos Hidráulicos, y de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Legislatura LXIII; y (2) el proceso y el resultado del Sistema de Colaboración y Consulta, que permitió que la población consultara el borrador de la iniciativa de ley, que detalla las propuestas para cada artículo, incluyendo justificaciones y comentarios relevantes.[[1]](#footnote-1)

**Respuesta 1.**

**(1)** Después de la publicación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, como ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional, se comienza a investigar y participar aún más en lo referente al tema del agua en México.

Debido a esto, el 8 de febrero de 2012 se modifica el artículo cuarto constitucional para reforzar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así estar en línea con las instancias internacionales de derechos humanos. De esta manera, surge la necesidad de contar con una Ley General de Aguas para reglamentar las nuevas disposiciones a partir de la reforma constitucionalmente.

Entre febrero y marzo de 2015, se presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados, tres iniciativas de Ley General de Aguas, todas fueron desechadas en agosto de 2015.[[2]](#footnote-2)De igual manera, en septiembre de 2015 se presentó, nuevamente, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, una ulterior iniciativa con proyecto de Ley General de Aguas; fue retirada en abril de 2016.[[3]](#footnote-3)

La *Comisión de Recursos Hidráulicos* desde que inició la LXII y la LXIII Legislaturas, de manera permanente y en ejercicio de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, ha realizado un análisis sobre los temas torales que debe contener el proyecto de Ley General de Aguas; siendo justamente el relativo a las atribuciones que deben tener los municipios en cuanto a la prestación de los servicios de agua potable y el saneamiento, uno de los temas identificados, ya que es la autoridad municipal la que realiza la prestación del servicio de manera directa.

Como resultado de lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos ha analizado y resuelto dos proyectos de Ley que tenían como finalidad regular el derecho humano al agua potable y al saneamiento; ambos proyectos fueron dictaminados en sentido negativo, en virtud de que no contaban con las características básicas necesarias que debe tener una Ley General, en cuanto a la coordinación de facultades que deberían ejercer los tres órdenes de gobierno (incluidas las atribuciones constitucionales de los municipios), que intervienen en la prestación del otorgamiento del servicio de agua potable y saneamiento.

Por su parte, en el Senado de la República se presentaron dos iniciativas de proyecto de ley, durante la LXII Legislatura. De esta manera, en 2012 el Senador Fidel Demédicis del Partido del Trabajo presentó el proyecto de Ley General de Agua Potable y Saneamiento, la cual fue desechada en Comisiones; posteriormente, en 2015 un grupo de senadores propusieron el proyecto de Ley General de Aguas y abrogar la Ley de Aguas Nacionales, esta iniciativa fue concluida por la Mesa Directiva al no ser dictaminada por las Comisiones turnadas.

En la actualidad, el tema continúa en la mesa de distintos sectores de la sociedad y distintos grupos de interés, así como en el ámbito legislativo. En el caso del Senado de la República en la Legislatura LXIV, las agendas legislativas de los distintos grupos parlamentarios concuerdan en que se debe reforzar, armonizar y mejorar en lo general la legislación referente al agua en México, así como de se debe realizar sin fines de privatización, protegiendo los derechos de todos los involucrados.

Como tal el proyecto de la Ley General de Aguas no se encuentra especificado en la agenda del Senado para esta Legislatura, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente se establecen objetivos en este sentido, como: 1) el fortalecimiento de las políticas en materia de agua; 2) la recuperación de las redes hidráulicas del país para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua en los hogares mexicanos; 3) la revocación de Decretos de Privatización del Agua; y 4) garantizar el derecho humano al agua, reconocido en el artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), autoridad encargada de la administración en materia de aguas nacionales, busca contribuir en el diseño del marco jurídico. La CONAGUA, en apoyo a la construcción de un nuevo proyecto de Ley General de Aguas, ha realizado actividades, tales como:

* Asistencia a reuniones con los diversos sectores usuarios de aguas nacionales.
* Ponencias en foros académicos.
* Participación en debates con legisladores de diversos grupos parlamentarios.
* Presentaciones en foros con medios de comunicación sobre el marco jurídico en materia de aguas.
* Elaboración de notas, artículos, presentaciones, resúmenes, etc.

Al respecto, en la Subdirección General Técnica de CONAGUA se han elaborado y publicado *Lineamientos Técnicos* en materia de abasto de agua y tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda, enfocados a las zonas rurales que carecen de estos servicios con la finalidad de dotar de servicios a nivel vivienda.

**(2)** La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a raíz de la discusión del proyecto de Ley General de Aguas analizado en la Cámara de Diputados, comenzó el proceso para realizar la *Propuesta General 1/2015 sobre el derecho al agua y saneamiento[[4]](#footnote-4)* la cual contempló tanto la investigación documental, como la realización de dos conversatorios que contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos públicos y dependencias de gobierno especializadas en la materia. Por tanto, la *Propuesta General* parte de un diagnóstico de la problemática en la Ciudad desde el trabajo de la CDHDF para exponer los estándares internacionales y criterios interpretativos respecto al derecho al agua y saneamiento para orientar la labor de las autoridades en la materia.

La *Propuesta General* fue remitida a ambas Cámaras del Poder Legislativo Federal, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para que, en el proyecto de Ley, se retomaran dichos estándares y las obligaciones del Estado en la discusión sobre el proyecto de Ley General de Aguas.

**Pregunta 2.** Sírvase describir cualquier medida adoptada para revisar el sistema, descentralizado en tres niveles de gestión, de los servicios de agua y saneamiento, con miras a asegurar la coordinación efectiva entre las autoridades administrativas y los distintos niveles, así como para asegurar un apoyo y una financiación adecuados a los proveedores de servicios a nivel municipal.

**Respuesta 2.**

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la Propuesta General 1/2015 sobre el derecho al agua y el saneamiento, resaltó que corresponde a la Federación velar por que las autoridades locales dispongan de recursos financieros, humanos y de otro tipo necesarios para desempeñar sus funciones con eficacia. Además, el gobierno nacional tiene la obligación de regular las actividades de las administraciones locales para supervisar y controlar su funcionamiento, a fin de que cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Es imperativo que haya una jerarquía clara de funciones en los distintos niveles de gobierno, para evitar la confusión, las lagunas y la ineficiencia.

Por otra parte, la CONAGUA cuenta con diferentes programas de apoyo, que mediante subsidios que se otorgan a los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios, se realizan acciones de infraestructura y mejora de la eficiencia. Dichos programas son:

* PROAGUA: cuyo objetivo es apoyar a los gobiernos estatales y municipales a través de la dependencia que determinen o a el organismo operador, para que incrementen la cobertura o fortalezcan los servicios de agua potable y alcantarillado, en beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en los servicios, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, municipios y sus organismos operadores. El programa cuenta con los siguientes apartados;
  + PRODDER: Programa de Devolución de Derechos, asigna a los prestadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento el importe equivalente a los derechos cubiertos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, con la condición de que aporten una cantidad igual y la inviertan en la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; con esto se logra que se incrementen las eficiencias físicas y comerciales de los organismos operadores y de la misma manera se mejore la calidad en la prestación de los servicios.
  + PROSANEAR: Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales. Su objetivo es promover el saneamiento a fin de incrementar el tratamiento de las aguas residuales, dando sustentabilidad al recurso, mediante la asignación de recursos federales a favor de los contribuyentes municipales y la condonación de sus créditos fiscales.

**Pregunta 3.** Sírvase describir los avances y los obstáculos observados en la aplicación de los convenios de coordinación, concluidos entre el gobierno federal y varios gobiernos estatales, “con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua, para fomentar el desarrollo regional”[[5]](#footnote-5)

**Respuesta 3.**

Las 32 entidades federativas firmaron con el gobierno federal, por conducto de la CONAGUA, el convenio de coordinación mediante el cual se conjuntan recursos y formalizan acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua para fomentar el desarrollo regional en cada una de las entidades. Respecto a la vigencia de los convenios de coordinación formalizados, en treinta entidades federativas los mismos finalizarán el 31 de diciembre de 2018 y en los casos de Colima y Guerrero su conclusión está prevista para el 31 de diciembre de 2022 y 26 de octubre de 2021, respectivamente.

Durante la vigencia de dichos instrumentos legales no se han presentado situaciones que hayan generado controversias o el surgimiento de dudas con motivo de su operación. De igual forma, los instrumentos administrativos derivados de estos convenios, como es el caso de sus Anexos de Ejecución y Técnico formalizados en cada ejercicio fiscal y aplicados conforme al marco normativo que los regula, donde se destacan las Reglas de Operación de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, mismos que son materia de estos convenios de coordinación.

Es importante destacar que los programas enmarcados dentro de los convenios de coordinación han sido auditados periódicamente por la Auditoría Superior de la Federación, habiéndose solventado en su oportunidad las observaciones derivadas de esas auditorías.

**Pregunta 4.** Sírvase aclarar la distribución de asignaciones presupuestarias para los servicios de agua y saneamiento, por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales, en comparación con las de años anteriores. Sírvase describir las medidas tomadas por el Gobierno para asegurar que se utilice el máximo de recursos disponibles para proteger, respetar y cumplir los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

**Respuesta 4.**

De acuerdo con el Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) para 2018 se destinaron $124,194, 985 de pesos, para el rubro de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas; así como $3, 348, 681, 967 pesos para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y $778, 663, 394 pesos para obras de agua potable, drenaje y tratamiento de conformidad con el ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.[[6]](#footnote-6)

El presupuesto asignado al rubro en 2018 fue superior al presupuesto de egresos destinado para agua potable y saneamiento en 2017, en el cual se destinaron $133, 285, 309 de pesos, para el rubro de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas; así como $3,195, 649, 284 pesos para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y $743, 078, 961 pesos para obras de agua potable, drenaje y tratamiento en el ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.[[7]](#footnote-7)

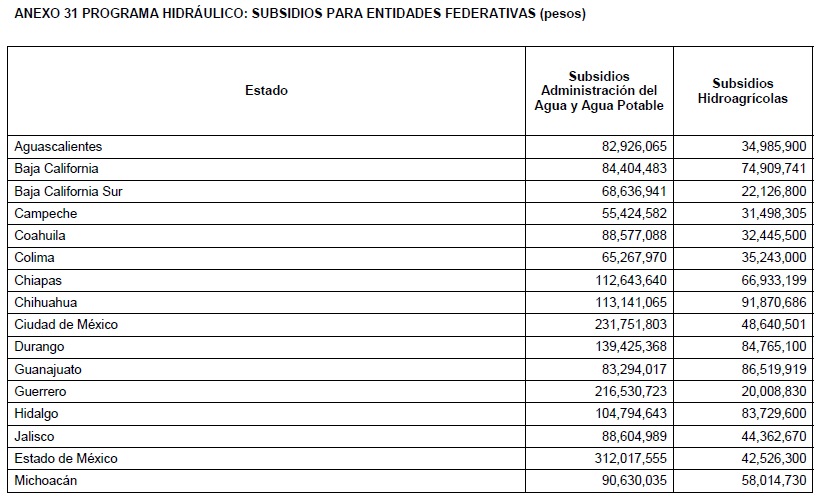
La asignación de recursos dentro del presupuesto de la CONAGUA para apoyar a los gobiernos estatales y municipales en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se lleva a cabo con base en Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

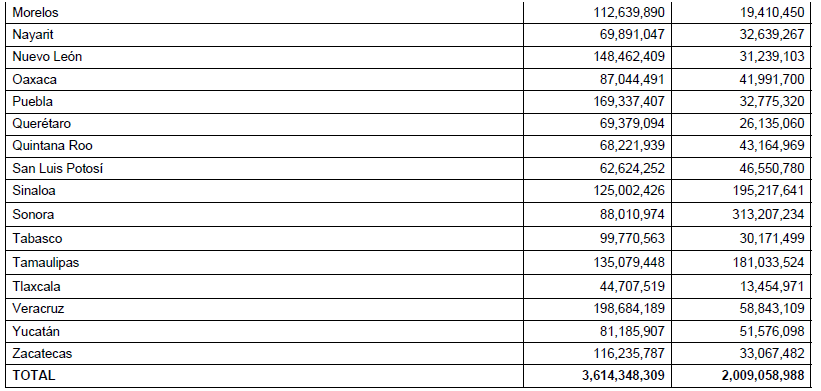
Si bien en los Anexos 10 y 16 del PEF 2018, se etiquetaron recursos que se deben destinar a los rubros de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, los recursos se autorizan en el Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas, conforme a la siguiente tabla, de ellos para el programa S074.- Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento le corresponden $3, 587,133,630.00 dentro del apartado Subsidios Administración del Agua y Agua Potable.

Este programa está sujeto a Reglas de Operación para el PROAGUA a cargo de la CONAGUA, aplicables a partir de 2018, publicadas el 30 de diciembre de 2017, en las que se establece que los recursos federales deben tener contraparte estatal y/o municipal, con ello lograr un mayor alcance en las metas programadas así mismo dan prioridad a la cobertura de los servicios de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento.

Adicionalmente, en dichas reglas se establece el compromiso para que la asignación de recursos se lleve a cabo prioritariamente al incremento de las coberturas en agua potable y alcantarillado.

En la siguiente tabla, se muestran los subsidios en agua para cada entidad federativa.





**Pregunta 5**. Teniendo en cuenta la disminución de la financiación de programas y servicios en las zonas rurales, sírvase describir cualquier medida tomada para asegurar la ampliación y la mejora del suministro de servicios de agua y saneamiento, particularmente en las regiones o comunidades que carecen de servicios o en las que los mismos son deficientes.

**Respuesta 5.**

Losrecursos financieros que se otorgan mediante el PROAGUA contemplan el fortalecimiento a organismos operadores para incrementar su capacidad institucional, mediante acciones que les permite, entre otros apoyos: la elaboración de estudios y proyectos, mejoramiento de eficiencias, cobertura de micro medición, elaboración de padrón de usuarios, implementación de sistemas comerciales, sectorización básica, catastro de infraestructura hidráulica, formulación de planes de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Dado que la atención a grupos vulnerables y a la población en situación de marginación es un tema prioritario para la CONAGUA, dentro del mismo programa se establece como población potencial a beneficiar, principalmente, a los habitantes de localidades de alta o muy alta marginación y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Además la CONAGUA tiene en ejecución el Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotécnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR), el programa se centra en la atención, principalmente, en las zonas rurales del país, impulsa el desarrollo social, el acceso al agua y saneamiento de las viviendas de zonas rurales de mayor marginación, mediante sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia y tecnologías de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda, Involucrando a la sociedad de forma activa y ayudar a abatir la pobreza multidimensional en el ámbito de los servicios básicos.

El programa ofrecen los servicios de agua y saneamiento a la población rural de México que se encuentra en situación de mayor marginación, en donde existen dificultades de índole técnica y económica para ser abastecidos mediante formas convencionales y que actualmente se tiene que trasladar grandes distancias para acceder al vital líquido. El programa considera además, la inclusión de sistemas de tratamiento a nivel vivienda, y una correcta disposición que evite así la contaminación. A través del PROCAPTAR se apoya la economía familiar eliminando el tiempo de acarreo del agua, mismo que puede ser utilizado para actividades productivas de las jefas de familia y formativas de los niños.

Lo anterior propicia las condiciones para mejorar su calidad de vida, mejorar la salud y fomenta la equidad de género; adicionalmente el sistema instalado permite que el beneficiario no realice ningún pago ante un prestador de servicio de agua, y evita la necesidad de comprar agua en pipas, siendo un medio accesible, asequible y aceptable para los beneficiarios, con quienes existe previamente un trabajo social de aceptación de los sistemas.

Asimismo, las acciones por misma naturaleza benefician al conjunto de habitantes de cada localidad con un enfoque de equidad que incluyen a todos los habitantes con independencia de su condición social, edad, religión, origen étnico indígena o afrodescendiente, discapacidad, preferencia sexual, género, filiación política o cualquier otra.

Otras medidas tomadas por la CONAGUA, para optimizar los recursos son las siguientes:

* Con el presupuesto asignado al PROAGUA, la CONAGUA buscó hacer más eficiente el presupuesto para mitigar la reducción de recursos y en coordinación con los estados y municipios, se priorizaron las obras y acciones buscando el incremento de coberturas, para ello la mezcla de recursos se hizo de la siguiente forma:
  + En 2017 mediante la participación en el programa de 31 entidades federativas, que significa una inversión conjunta por un total de 6.3 MMDP con una participación promedio de 57.6 por ciento federal y 42.4 por ciento de la contraparte.
  + En 2018 mediante la participación en el programa de 30 entidades federativas, que significa una inversión conjunta programada por un total de 6.2 MMDP con una participación promedio de 55.1 por ciento federal y 44.9 por ciento de la contraparte, estos dos años contrastan con el año 2016 en donde la composición de la mezcla de recursos fue de 65.0 por ciento federal y 44.9 de la contraparte.
* Para mitigar la falta de recursos y ser más eficiente y eficaz en la aplicación de los mismos se ha permitido que la aportación de la contraparte provenga de diversos programas o fondos, con la finalidad de potenciar los recursos que se aplican a este programa.
* Las obras que por su magnitud requieren grandes inversiones se están considerando con apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mediante Asociaciones Público Privadas
* De continuar en el ejercicio 2019 con esta tendencia en la asignación de recursos mostrada en los últimos dos años, implica que tanto gobiernos estales, municipales y organismos operadores deben contar con carteras de proyectos viables, priorizadas y con respaldo de la contraparte federal a fin de proponer escenarios presupuestales de gasto mayores para el sector ante las instancias correspondientes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y La Cámara de Diputados y con ello buscar mayor asignación de recursos para el programa o en su defecto los gobiernos estatales o municipales deberán aportar un mayor porcentaje en la contraparte. *IDEM-20.*
* Asimismo, las acciones por misma naturaleza benefician al conjunto de habitantes de cada localidad con un enfoque de equidad que incluyen a todos los habitantes con independencia de su condición social, edad, religión, origen étnico indígena o afrodescendiente, discapacidad, preferencia sexual, género, filiación política o cualquier otra.

**Pregunta 6.** Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para establecer entidades reguladoras oficiales para regular, supervisar y vigilar a los proveedores privados y públicos. Asimismo, sírvase proporcionar información sobre las discusiones, en el contexto del desarrollo de la Ley General de Aguas, al respecto de la creación de entidades reguladores oficiales al nivel estatal, que tendrían las responsabilidades de regular, supervisar y vigilar la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

**Respuesta 6.**

La CONAGUA reconoce el papel trascendental de los municipios en la realización de los servicios públicos de agua potable y de saneamiento. Por ello, a través de su participación en el diseño de la Ley General de Aguas, propuesto en el año 2015, impulsó, en el marco de respeto de la autonomía estatal, la creación de un ente regulador que tenga como funciones vigilar, supervisar, fortalecer y mejorar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Como parte de las actividades de apoyo a los estados y municipios del país, la CONAGUA publicó la *Guía de Políticas Públicas en el ámbito estatal en materia de agua potable y saneamiento*,[[8]](#footnote-8) con el objetivo de fortalecer a las instituciones y políticas públicas en el ámbito del derecho humano al agua y los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

En este documento se señala la importancia de crear entidades reguladoras a nivel estatal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en nuestro país, así como las funciones básicas que deben cumplir estas entidades y los beneficios que se podrían obtener tanto en la gestión de los servicios, como en el acceso al agua y saneamiento de la población.

La CONAGUA no cuenta con facultades para la creación de entidades reguladoras oficiales de los proveedores tanto privados como públicos. De acuerdo a la distribución de competencias constitucional, los municipios tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y tienen a su vez, la facultad reglamentaria. Por lo que respecta a la facultad legisladora en materia de servicios, corresponde a los estados, por lo que son estos quienes tienen la facultad de crear las entidades reguladoras oficiales de los proveedores (artículos 115 y 116 de la Constitución Política).

En el Poder Legislativo, por parte del Senado de la República existieron diversas argumentaciones dentro de los debates para la aprobación de la Ley General de Aguas, en la iniciativa presentada en el 2015 se plantea la inclusión de una Contraloría Social del Agua, como un organismo desconcentrado y con autonomía financiera dentro del Consejo Nacional de Cuencas que permitiría erradicar la corrupción y la impunidad en el ejercicio de la función pública.

La Contraloría Social del Agua serviría como un mecanismo de participación ciudadana, ya que las comunidades y ciudadanos afectados, fungirían como observadores en las reuniones oficiales de toma de decisiones sobre el derecho humano al agua, con la vigilancia de las instancias ciudadanas y comunitarias de gestión del agua y a través de mantener actualizado un Sistema Nacional de Derecho Humano al Agua que incluya una evaluación anual de cumplimiento de los funcionarios públicos, que incluya aspectos de sanciones o revocación de mandatos de funcionarios que incumplan su trabajo.

Sin embargo, se siguen manteniendo las atribuciones de supervisión para los servicios de agua y saneamiento que tenía la CONAGUA y los Comités de Cuenca aunado a los gobiernos tanto estatales como municipales, como se menciona en los párrafos anteriores por parte de la CONAGUA. En sí, no se define ni se crea a una entidad regulatoria para tal fin, tal como se señalan en los artículos 10, 17, 41y 169 de la Ley General del Agua, en los que se determinan las facultades de la CONAGUA, las juntas municipales de agua potable y saneamiento, comités de microcuencas y la Contraloría Social del Agua, respectivamente.

En el siguiente cuadro se enlistan las atribuciones que la Ley General del Agua establece para regular, supervisar y vigilar la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ley General del Agua** | |
| **Artículo** | **Dice** |
| **Artículo 10** | La Comisión Nacional del Agua ejercerá las siguientes atribuciones:  VIII. Delimitar y supervisar que los cauces de los ríos, lagos, arroyos y demás bienes públicos inherentes al agua en los términos de esta ley, se mantengan libres de construcciones |
| **Artículo 17** | Las juntas municipales de agua potable y saneamiento, tendrán las siguientes atribuciones:  VIII. Vigilar la calidad y cobertura de los servicios; la buena administración; la rendición de cuentas a la Junta Municipal así como a los usuarios de sus servicios; procesos internos democráticos e incluyentes, así como el cumplimiento con las acciones acordadas en el Plan Municipal por parte de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en su territorio; |
| **Artículo 41** | Los comités de microcuenca tendrán las siguientes funciones:  IV. Vigilar el cumplimiento de las condicionantes de los concesionarios de aguas nacionales en su territorio; |
| **Artículo 169** | La Contraloría Social del Agua tendrá las siguientes atribuciones:  II. Vigilar los procesos de elaboración y ejecución de los Programas Rectores, en la determinación del Volumen Anual de Agua Ecológicamente Aprovechable y del Volumen de Acceso diario por habitante, así como la identificación de Prioridades y Condicionantes para expedición de títulos de asignaciones y de concesiones de agua en las cuencas, garantizando que las autoridades respeten las resoluciones de los consejos de cuenca;  III. Vigilar el uso y transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos;” |

**Pregunta 7.** Sírvase proporcionar información sobre cualquier medida adoptada por el Gobierno para establecer mecanismos de intervención rápida que exijan una acción estatal o federal para hacer frente a situaciones en que los sistemas de agua y saneamiento fallen a nivel municipal, como el apoyo y la asistencia técnica urgente, la financiación de emergencia, el apoyo continuo y la capacitación.

**Respuesta 7.**

La Ley de Aguas Nacionales, reconoce que, en todos los casos, los usos domésticos y público urbano, encaminados a la satisfacción de las necesidades de la población, tendrán preferencia sobre cualquier otro uso.

Asimismo, la CONAGUA, mediante su participación en diversas acciones encaminadas a la construcción y el diseño de la Ley General de Aguas, ha promovido como principio de la política hídrica que, al igual que en la Ley de Aguas Nacionales, los grupos vulnerables y la población menos favorecida económicamente sean atendidos prioritariamente por el Estado, o bien, que para prevenir, atender y mitigar los riesgos generados por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, se debe abastecer del recurso hídrico a la población, en particular a los grupos vulnerables y población menos favorecida en caso de emergencia.

En casos de presentarse situaciones de urgencia o emergencia que requieran atención inmediata o continuidad, la CONAGUA puede apoyar hasta con el 100% de los recursos requeridos para la ejecución de las obras de agua potable o saneamiento requeridas para la atención de estas situaciones.

Situación similar sucede con las localidades que padecen problemas de salud pública, donde la CONAGUA puede apoyar hasta con el 100% de los recursos requeridos para la infraestructura de agua potable y saneamiento. Estas condiciones están plasmadas en las Reglas de Operación del PROAGUA 2018.[[9]](#footnote-9)

A fin de intervenir de manera preventiva para lograr el respeto al derecho humano al agua, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha realizado solicitudes de colaboración al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX); en ese sentido, de 2015 a 2016 se llevaron a cabo 152 solicitudes. De igual manera, este Organismo Autónomo ha emitido medidas precautorias al SACMEX, a efecto de que se asegure el acceso y disposición del vital líquido.

**Pregunta 8.** Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para asegurar el acceso universal al agua y el saneamiento para las poblaciones marginadas que viven en las circunstancias más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las poblaciones rurales, las personas sin hogar y los residentes de zonas urbanas periféricas con servicios deficientes. Asimismo, sírvase describir cualquier medida tomada por el Gobierno para vigilar la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento dentro de los hogares.

**Respuesta 8.**

El Programa de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene identificadas las localidades indígenas que carecen de agua potable y saneamiento, gracias a esto se establecen metas enfocadas en disminuir el rezago en las necesidades básicas. En el periodo de 2013-2017 se han realizado 2, 403 obras y acciones en materia de agua potable y 2, 066 acciones obras y acciones de saneamiento con la finalidad de combatir dicho rezago, de igual manera se enfocan recursos a estas necesidades destinando el 60% del presupuesto total asignado al Programa, como medida para abatir el rezago en agua potable y saneamiento.

Como parte de los esfuerzos para asegurar el acceso universal del agua, laCONAGUA utiliza al máximo los recursos etiquetados para subsidios a través del PROAGUA, la aplicación de dichos recursos se lleva a cabo con base en Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federal (DOF)[[10]](#footnote-10), asegurando que ésta se lleve a cabo con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

Adicionalmente, el PROCAPTAR, ofrece servicios de agua y saneamiento a la población rural de México que se encuentra en situación de mayor marginación, en donde existen dificultades de índole técnica y económica para ser abastecidos mediante formas convencionales y que actualmente se tiene que trasladar grandes distancias para acceder al vital líquido. El programa considera además, la inclusión de sistemas de tratamiento a nivel vivienda, y una correcta disposición que evite así la contaminación.

**Pregunta 9.** Sírvase describir cómo la cuarta fase del “Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales”, realizado en cooperación con el Banco Inter-Americano de Desarrollo y concluido el día 6 de marzo de 2018, contribuyó a la realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento de las poblaciones marginadas o en las circunstancias más vulnerables. A este respecto, sírvase aclarar las medidas tomadas para asegurar que las futuras fases del programa serán alineadas explícitamente con el marco de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

**Respuesta 9.**

El período comprendido entre 2014-2018 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió al gobierno de México en la cuarta fase del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS IV) con un crédito externo de 450 millones de dólares.

Con la ejecución del PROSSAPYS IV se contribuyó, entre otras cosas, a la realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento de las poblaciones marginadas o en las circunstancias más vulnerables, fortaleciendo el abastecimiento del agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo otorgado para la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2, 500 habitantes.

Los productos alcanzados durante la ejecución del PROSSAPYS IV fueron los siguientes:

* Se construyeron 1, 287 sistemas de agua potable, beneficiando a una población total de 534, 377 habitantes, con un costo de 165.6 millones de dólares.
* También se construyeron 367 sistemas de alcantarillado sanitario, beneficiando a una población total de 232, 491 habitantes, con un costo de 68.3 millones de dólares.
* En cuanto a los sanitarios rurales, se construyeron 9, 731 sanitarios, beneficiando a una población total de 52,372 habitantes, con un costo de 22.8 millones de dólares.
* En cuanto a las medidas tomadas para asegurar que las futuras fases del Programa serán alineadas explícitamente con el marco de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, se manifiesta que si bien existe la posibilidad de trabajar con el BID en futuras fases del programa, esto dependerá de las decisiones que tome la próxima administración.

**Pregunta 10.** Se remite al acuerdo aprobado por el Gobierno federal, el 19 de octubre de 2017, por el que se adiciona el siguiente indicador en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: “Porcentaje de población con drenaje conectado a la red pública de alcantarillado o fosa séptica (Nacional y Estatal)”.[[11]](#footnote-11) Sírvase describir los avances observados en asegurar la actualización regular de dicho indicador por la Comisión Nacional del Agua, tal como se indica en el artículo 2 del acuerdo referido.

**Respuesta 10.**

Dado que este dato es quinquenal y el más reciente es del 2015, en el cual se señala que la cobertura de alcantarillado es el 91.45%. En 2020 se procederá a recabar con el área responsable los avances en la materia y se actualizarán las cifras.

**Pregunta 11.** Sírvase describir las medidas adoptadas por el Gobierno para asegurar que la estándar de calidad del agua potable se alinee con las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable.

**Respuesta 11.**

La Secretaría de Salud por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano descentralizado, es la dependencia federal del gobierno de México, responsable de elaborar y publicar en el DOF la norma de calidad de agua potable. Actualmente, está en vigor la "Norma Oficial Mexicana Nom-127-Ssa1-1994, "*Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización*", misma que está en proceso de modificación considerando las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La misma COFEPRIS es la responsable de la vigilancia y la supervisión del cumplimiento de los límites permisibles establecidos en dicha norma.

Durante el periodo de julio de 2016 a abril de 2017, la CONAGUA participó en los Grupos de Trabajo encargados de modificar la *NOM-127-SSA1-1994, agua para uso y consumo humano y la NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público,* bajo la coordinación de la COFEPRIS. En abril de 2017, los Grupos de Trabajo concluyeron los proyectos de modificación.

En lo que respecta a la calidad del agua, la modificación de la NOM-127, incorpora algunos parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, la CONAGUA a través del PROAGUA en su apartado *Agua Limpia*, fomenta y apoya con recursos de subsidio que las autoridades municipales brinden agua de calidad desinfectada a la población, mediante la instalación de equipos y la adquisición de insumos desinfectantes. *IDEM-13*

**Pregunta 12.** Durante su visita, el Relator Especial se enteró de que se había creado una comisión para actualizar la norma actual para permitir una vigilancia y una supervisión del agua potable más adecuadas y orientadas a la protección de la salud (A/HRC/36/45/Add.2, para. 30). Sírvase describir los avances conseguidos por dicha comisión para actualizar el estándar de calidad del agua potable, incluyendo las medidas tomadas para asegurar la participación de la población en este proceso.

**Respuesta 12.**

La CONAGUA reporta que se encuentra en proceso de actualizar el estándar de calidad del agua potable.

1. El junio de 2017 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud aprobó los proyectos de modificación a la NOM-127 y NOM-179 para publicarse en el Diario Oficial de la Federación a consulta pública.
2. La COFEPRIS espera que durante el presente año la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) dictamine la Manifestación del Impacto Regulatorio (MIR) correspondiente de los proyectos de modificación para poder publicarlos a consulta pública.

**Pregunta 13.** Sírvase describir los avances y obstáculos observados en ejercer una vigilancia y una supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y más orientadas a la protección de la salud, a través de los programas relevantes del Gobierno, como el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.

**Respuesta 13.**

Actualmente está en vigor la "Norma Oficial Mexicana Nom-127-Ssa1-1994, "*Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización*", misma que está en proceso de modificación considerando las guías y recomendaciones de la OMS.

Durante el periodo de julio de 2016 a abril de 2017, la CONAGUA participó en los Grupos de Trabajo encargados de modificar la *NOM-127-SSA1-1994, agua para uso y consumo humano y la NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público,* bajo la coordinación de la COFEPRIS.

La Comisión Nacional del Agua a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en su Apartado Agua Limpia, fomenta y apoya con recursos de subsidio que las autoridades municipales brinden agua de calidad desinfectada a la población, mediante la instalación de equipos y la adquisición de insumos desinfectantes.

**Pregunta 14.** Se remite al informe de la Comisión Nacional del Agua, en el que se indica que dicha Comisión proporciona equipos de desinfección y tratamiento a comunidades que se abastecen de fuentes naturales de agua, además de aplicar otras medidas protectoras como la protección de fuentes de agua.[[12]](#footnote-12) Sírvase describir como tales medidas se aplican en la práctica y contribuyen a asegurar el acceso al agua potable segura, para todas las personas que obtienen agua de fuentes no centralizadas.

**Respuesta 14.**

El caudal de agua desinfectada en 2012, era de 322,971 l/s; al cierre del 2017 se logró desinfectar 337,751 l/s, es decir, 14,780 L/s más que en la administración anterior, para sostener la cobertura de desinfección en 97.0%, de los 348,296 l/s de caudal de agua suministrada a la población, a través de los sistemas de abastecimiento a nivel nacional. Con ello se beneficia a una población del orden de 105.8 millones de habitantes que ya cuentan con agua de calidad.

Durante el sexenio 2012-2018, se ha apoyado a las autoridades estatales y municipales en la colocación de equipamiento nuevo de desinfección en 5, 219 localidades del país, para pasar de 29, 184 a 34, 403 localidades equipadas. El objetivo a 2018 es que al menos 35, 000 localidades cuenten con equipos de desinfección, en beneficio de la salud de la población, cumpliendo con la línea de acción “*Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para prevenir padecimientos de origen hídrico*” del Objetivo 3 del Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

Para lo anterior, se lograron acciones de apoyo para la ampliación de cobertura de desinfección del agua, entre las que destacan:

* Instalación de 2, 602 hipocloradores y 132 dosificadores de gas cloro; reposición de 6, 005 hipocloradores y 447 dosificadores de gas cloro; rehabilitación 648 de equipos de desinfección y adquisición de 5, 866 kit de refacciones, así como la instalación de 26, 463 dispositivos rústicos para desinfectar agua de consumo directo, en localidades donde la gente se abastece de fuentes naturales de agua o en depósitos comunitarios.
* Suministro y distribución de 886, 857 kilogramos de gas cloro, 1´219,396 kilogramos de hipoclorito de calcio y 14’231,579 kilogramos de hipoclorito de sodio y 681,903 frascos de plata coloidal
* Protección física de 1,073 fuentes de abastecimiento e instalación de 365 casetas de desinfección; la ejecución de 914 operativos de saneamiento básico y el muestreo de cloro residual libre con 448,101 muestras, 9,151 bacteriológicas, 1,048 de arsénico, 915 de flúor, 18 de cadmio, 18 de mercurio y 147 de turbiedad, así como la capacitación a 8,070 técnicos en materia de desinfección del agua y 492 para planes de seguridad del agua.

Los beneficios alcanzados contribuyen a sostener la desinfección del agua en los organismos operadores de agua potable, que repercute en la disminución de enfermedades de origen hídrico, en especial evitar que proliferen las gastrointestinales que pueden ocasionar decesos en menores de cinco años o adultos mayores.

**Pregunta 15.** Sírvase aclarar las medidas tomadas para aplicar la modificación de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, reformada en mayo de 2017, para incluir el artículo siguiente: “Artículo 5 XIV: Promover y desarrollar programas de orientación permanente, con el objeto de preservar la calidad del agua, considerando las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, y a su vez, propiciando su aprovechamiento racional”[[13]](#footnote-13)

**Respuesta 15.**

El artículo fue derogado, junto con muchos otros, en la reforma de Noviembre de 2017.[[14]](#footnote-14)

**Pregunta 16.** Sírvase proporcionar información sobre cualquier medida adoptada por el Gobierno para asegurar que se apliquen tarifas sociales para los servicios de agua y saneamiento para garantizar la asequibilidad para todos, incluidos los más pobres y marginados de la sociedad, y las familias cuyas circunstancias las han dejado en una situación muy vulnerable, como las afectadas por las desapariciones forzadas.

**Respuesta 16.**

Como parte de las actividades de apoyo a los estados y municipios del país, la CONAGUA publicó la *Guía de Políticas Públicas en el Ámbito Estatal en Materia de Agua Potable y Saneamiento*[[15]](#footnote-15), con el objetivo de fortalecer a las instituciones y políticas públicas en el ámbito del derecho humano al agua y los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

En este documento de distribución nacional, se señala que las tarifas deben cumplir con un objetivo social, consistente en asegurar que todos los usuarios, particularmente los más pobres tengan acceso a los servicios.

Asimismo, se publicó la *Guía para la* *Identificación de Costos para la Sostenibilidad de los Organismos Operadores de Agua*[[16]](#footnote-16)*,* la cual es un documentos de referencia tanto para el operador de los servicios como para los entes reguladores en cada ámbito, que propone un lenguaje común que les permita entender y abordar de la misma manera las funciones que debe desempeñar el organismo operador en la sociedad y los costos asociados que garanticen su viabilidad en el largo plazo.

La CONAGUA no cuenta con facultades para determinar las tarifas de los servicios que se presentan en cada municipio o estado.

De acuerdo a la distribución de competencias constitucional, los municipios tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y tienen a su vez, la facultad de proponer las tarifas de los servicios a las legislaturas de los estados. Por lo que respecta a la facultad legisladora en materia de derechos (tarifas) por los servicios, corresponde a los estados, por lo que son estos quienes tienen la facultad de determinar y aprobar las tarifas que se aplican a los municipios de la entidad federativa correspondiente (artículos 115 y 116 de la Constitución Política).

**Pregunta 17.** Sírvase proporcionar información sobre la aplicación del Programa de Repatriación Humana, que ofrece gratuitamente a los mexicanos repatriados numerosos beneficios como el acceso, *inter alia*, al agua (CERD/C/MEX/18-21, para. 39).

**Respuesta 17.**

El Programa de Repatriación Humano es coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INAMI), tiene como objetivo brindar a los mexicanos que regresan al país, una atención integral, para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo de México. Actualmente, el Programa cuenta con 11 módulos de Reparación en la Frontera Norte y uno en la Ciudad de México.

El Programa cuenta con una vertiente de sustentabilidad de los recursos naturales, el cual otorga apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras acciones y prácticas sustentables enfocadas a cultivos para la producción de insumos bioenergéticos, aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, hasta septiembre de 2018, el Estado mexicano ha otorgado un total de 131, 419 apoyos en materia de alimentos y/o agua[[17]](#footnote-17).

**Pregunta 18.** Sírvase proporcionar información sobre cualquier discusión o estudio para (1) tratar la prestación de servicios a personas y familias sin capacidad económica para pagar las facturas por los servicios, y (2) incluir disposiciones específicas en el borrador de iniciativa de la Ley General de Aguas para prohibir la interrupción del servicio a los usuarios sin capacidad económica para pagar por esos servicios.

**Respuesta 18**

**(1)** La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9°, apartado F, numeral 3 manifiesta que “*El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.*[[18]](#footnote-18)No obstante, se encuentra pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Constitución local, promovida por la Procuraduría General de la República (PGR). Esta Comisión ha estado apoyando y promoviendo la defensa de la validez de la Constitución Política de la Ciudad de México, mediante diversas acciones, entre ellas, un *amicus curiae*.

**(2)** En el proyecto de Ley General de Aguas presentado en el año 2015, en cuyo diseño, la CONAGUA como autoridad en materia de aguas nacionales participó, se promovió que frente a la falta de infraestructura hidráulica, y solo de forma excepcional, para el suministro de agua potable la autoridad competente podrá facilitar su transportación, distribución y abastecimiento regular por distintos medios alternativos, sin perjuicio de su calidad.

Asimismo, dicho proyecto de Ley, establecía la obligación de abastecer el volumen de agua que garantice ese derecho humano, prever su suministro en casos de emergencia o desastre y restringir o suspender la prestación del servicio únicamente en los supuestos que establezca la normatividad aplicable, así como llevar a cabo el mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica en tiempo razonable, para su restablecimiento.

Como parte de las actividades de apoyo a los estados y municipios del país, la CONAGUA publicó la *Guía de Políticas Públicas en el Ámbito Estatal en Materia de Agua Potable y Saneamiento*[[19]](#footnote-19)*,* con el objetivo de fortalecer a las instituciones y políticas públicas en el ámbito del derecho humano al agua y los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

En este documento de distribución nacional, se señala que en caso de corte de servicio a usuarios con adeudos, la medida sancionadora debe encontrarse prevista en la legislación estatal y que es necesario asegurar el acceso a una cantidad de agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas, conforme a los lineamientos aceptados internacionalmente.

La CONAGUA no cuenta con facultades para determinar las condiciones de prestación de los servicios, lo que incluye las disposiciones jurídicas que prohíban o permitan la interrupción de los servicios sin capacidad económica para pagar las facturas por el mencionado servicio.

De acuerdo a la distribución de competencias constitucional, los municipios tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y tienen a su vez, la facultad reglamentaria. Por lo que respecta a la facultad legisladora en materia de servicios, corresponde a los estados, por lo que son estos quienes tienen la facultad de establecer las condiciones en que se deben proveer los servicios, así como los casos de excepción (artículos 115 y 116 de la Constitución Política).

**Pregunta 19.** Sírvase proporcionar información sobre los resultados de la campaña promovida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), del 28 de febrero al 30 de abril de 2018, por la cual se permitió a la población que registrara para condonar el 100% del pago de multas fiscales, recargos y gastos de ejecución en contribuciones relacionados al suministro de servicios de agua.

**Respuesta 19.**

El gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa de regularización fiscal “Ponte al Corriente”, por medio del cual se condonaría hasta el 100% del pago de multas fiscales, recargos y gastos de ejecución en conceptos como predial, tenencia, derechos por el suministro de agua, impuestos sobre nóminas, entre otros.

Para el caso del pago de los derechos de suministro de agua y los derechos de descarga a la red de drenaje, el gobierno de la Ciudad de México estableció que los contribuyentes acudieran directamente a las oficinas del SACMEX u obtuvieran su línea de captura a través de internet.

Hasta el momento, no se encuentra con información pública de los resultados de esta campaña.

**Pregunta 20.** Sírvase describir como las asignaciones presupuestarias para los servicios de agua y saneamiento, a todos los niveles del gobierno, han evolucionado desde la visita del Relator Especial, aclarando las medidas tomadas para mitigar eventuales efectos perjudiciales de la disminución de financiación, en particular para los sistemas de agua y saneamiento gestionados por las comunidades.

**Respuesta 20.**

Al respecto solo encontré una noticia, el presupuesto de agua fue asignado a mega proyectos hídricos.[[20]](#footnote-20)

El Programa con el que la CONAGUA apoya a los Gobiernos Estatales para impulsar los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento en Zonas Urbanas y Rurales del país es el PROAGUA, el cual está regido por Reglas de Operación, en las que se establecen los requisitos y aportaciones de la federación así como de la contraparte estados y municipios, ante la drástica disminución de recursos asignados en el PEF desde el año 2017 y que prevaleció en 2018, que representó un poco más del 70%, que significo menos 9 MMDP, se tuvieron que adoptar algunas medidas a fin de multiplicar los recursos, buscando el mayor número de habitantes incorporados a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento entre las que se encuentran las siguientes:

Con el presupuesto asignado al PROAGUA, la CONAGUA buscó hacer más eficiente el presupuesto para mitigar la reducción de recursos y en coordinación con los estados y municipios, se priorizaron las obras y acciones buscando el incremento de coberturas, para ello la mezcla de recursos se hizo de la siguiente forma:

* En 2017 mediante la participación en el programa de 31 entidades federativas, que significa una inversión conjunta por un total de 6.3 MMDP con una participación promedio de 57.6%federal y 42.4% de la contraparte,
* En 2018 mediante la participación en el programa de 30 entidades federativas, que significa una inversión conjunta programada por un total de 6.2 MMDP con una participación promedio de 55.1% federal y 44.9 por ciento de la contraparte.
* Para mitigar la falta de recursos y ser más eficiente y eficaz en la aplicación de los mismos se ha permitido que la aportación de la contraparte provenga de diversos programas o fondos, con la finalidad de potenciar los recursos que se aplican a este programa.
* Las obras que por su magnitud requieren grandes inversiones se están considerando con apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mediante Asociaciones Público Privadas
* De continuar en el ejercicio 2019 con esta tendencia en la asignación de recursos mostrada en los últimos dos años, implica que tanto gobiernos estales, municipales y organismos operadores deben contar con carteras de proyectos viables, priorizadas y con respaldo de la contraparte federal a fin de proponer escenarios presupuestales de gasto mayores para el sector ante las instancias correspondientes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y La Cámara de Diputados y con ello buscar mayor asignación de recursos para el programa o en su defecto los gobiernos estatales o municipales deberán aportar un mayor porcentaje en la contraparte. *IDEM-5*

**Pregunta 21.** Sírvase describir las medidas adoptadas por el Gobierno para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas al agua y el saneamiento, particularmente en zonas urbanas periféricas y localidades rurales dispersas, y para eliminar el impacto que la recogida y el transporte de agua y las tareas relacionadas con el agua y el saneamiento en el hogar tiene en la posibilidad de que las mujeres se dediquen al trabajo y la posibilidad de que las niñas accedan a la educación.

**Respuesta 21.**

La CDI reporta que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2014, las mujeres mayores de 12 años dedicaban 2.9 horas en promedio a la semana para el acarreo del agua, siendo un número mayor al que utilizan los hombres. Dicho dato es relevante para la planeación estratégica en el avance del abatimiento de los rezagos en materia de agua potable y saneamiento; tomando en cuenta la importancia del papel que desempeñan las mujeres en los hogares indígenas, el programa enfocó recursos en obras y acciones de agua potable y saneamiento llegando a ocupar el 60% del total del presupuesto destinado a obras de infraestructura básica, con la finalidad de facilitar las tareas del hogar y generar opciones productivas. Las obras en materia de agua potable han beneficiado a 842, 744 habitantes de localidades indígenas y a 752, 518 en materia de saneamiento, en el periodo comprendido entre 2013 al 2017, de estos beneficiarios, el 50.9% son mujeres.

No obstante que las acciones del PROAGUA de la CONAGUA se llevan a cabo sin distinción de género, etnia o filiación política o religiosa, durante su operación se promueve, dentro del Apartado Rural, la participación e integración activa de las mujeres en los comités comunitarios que tienen a su cargo la operación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento. Estas condiciones están plasmadas en las Reglas de Operación del PROAGUA que CONAGUA publica cada año en el DOF.

En el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se realizaron las siguientes actividades, *a largo plazo*:

1. En el seno de la Mesa Interinstitucional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (que opera el INMUJERES desde el 2014), la CONAGUA presenta las acciones que realiza. En sus informes anuales describe la inclusión de género en los proyectos que implementan, además de tomar en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas para invertir en las tecnologías que son incorporadas en zonas rurales con el objetivo de liberarles tiempo para realizar actividades de estudio o recreación y lograr mayor calidad de vida.

Se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, del 24 al 26 de octubre de 2017. El evento estuvo dirigido a mujeres líderes rurales con cargo de Presidentas de Comisariado Ejidal y Bienes Comunales de 18 entidades federativas. En este encuentro se impartieron tres talleres por parte de las y los representantes de las instituciones participantes de la Mesa Interinstitucional de Mujeres Rurales, entre ellas CONAGUA, uno de estos temas fue sobre el “Manejo sostenible de los ecosistemas” en el cual, entre otros tópicos se les habló de las Ecotécnias como captación de agua de lluvia mediante un tanque de almacenamiento, sistema de distribución y sanitarios ecológicos. Es importante mencionar que estas capacitaciones también se imparten en la lengua indígena que predomina en el lugar.

**Pregunta 22.** La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal destacó el “nivel de vida adecuado y vulneración a los [derechos económicos, sociales y culturales] de las mujeres” como uno de 11 temas principales de las violaciones cometidas contra las mujeres en el período 2013-2016, de las cuales se contabilizaron “672 agraviadas respecto al derecho al agua”.[[21]](#footnote-21) Sírvase describir cualquier medida tomada por el Gobierno para remediar esas violaciones y para establecer mecanismos con el fin de identificar otras violaciones de este tipo en todo el país.

**Respuesta 22.**

La CONAGUA a través del PROAGUA da respuesta a las necesidades de la creciente demanda por fortalecer y desarrollar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para un número mayor de habitantes de las zonas urbanas y rurales de las entidades federativas del país, mediante el apoyo a la infraestructura y mejoramiento de las eficiencias, con ello, los Organismos Operadores puedan ofrecer un servicio con eficiencia y calidad.

Las acciones por su naturaleza benefician al conjunto de habitantes de cada localidad con un enfoque de equidad incluyendo a todos los habitantes con independencia de su condición social, edad, religión, origen étnico indígenas o afrodescendientes, discapacidad, preferencia sexual, género, filiación política o cualquier otra.

**Pregunta 23.** Sírvase describir las medidas adoptadas por el Gobierno para eliminar las restricciones que limitan o prohíben la prestación de servicios de agua y saneamiento a los asentamientos ilegales o irregulares, y para asegurar que los habitantes de tales asentamientos gocen plenamente de sus derechos de acceso a esos servicios, sin discriminación.

**Respuesta 23.**

Como parte de las actividades de apoyo a los estados y municipios del país, la CONAGUA publicó la *Guía de Políticas Públicas en el Ámbito Estatal en Materia de Agua Potable y Saneamiento*[[22]](#footnote-22). En el documento se señala que el municipio debe identificar las zonas que no son aptas para asentamientos humanos y evitar su colonización. Sólo en el caso de que la regularización o reubicación a zonas adecuadas se complique, es recomendable promover entre sus habitantes métodos de captación de agua de lluvias, abastecimiento de agua a través de métodos alternos al servicio en red, la construcción de letrinas secas y de otras tecnologías aptas para esas zonas, como una forma de asegurar el acceso el agua para consumo personal y doméstico, así como al saneamiento básico.

La CONAGUA no cuenta con facultades para determinar o eliminar restricciones a la prestación de servicios en los asentamientos ilegales o irregulares.

De acuerdo a la distribución de competencias constitucional, los municipios tienen a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y tienen a su vez, la facultad reglamentaria. Por lo que respecta a la facultad legisladora en materia de servicios, corresponde a los estados, por lo que son estos quienes tienen la facultad de establecer las condiciones en que se deben proveer los servicios, así como los casos de excepción (artículos 115 y 116 de la Constitución Política).

**Pregunta 24.** Sírvase describir cualquier política adoptada u otra medida práctica tomada por el Gobierno para mejorar el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene en todas las instalaciones educativas, instituciones de salud, prisiones y otras instituciones públicas. A este respecto, sírvase indicar como se ha asignado prioridad a los estados y comunidades que presenten los niveles más elevados de pobreza y marginación.

**Respuesta 24.**

Al respecto, a través de la Subdirección General Técnica, se ha establecido contacto con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con la finalidad de dar asesoría técnica con fines de abasto de agua y saneamiento a través de la captación de lluvia y el tratamiento de aguas residuales en el sitio, orientado a escuelas rurales, comedores comunitarios rurales y vivienda rural respectivamente.

**Pregunta 25.** Sírvase describir las medidas tomadas por el Gobierno para asegurar que los servicios de agua y saneamiento para los pueblos indígenas sean accesibles, asequibles y aceptables para ellos, y apropiados a sus propias tradiciones culturales, creencias y sistemas tradicionales de gestión de la tierra y el agua de la comunidad.

**Respuesta 25.**

El Programa de Infraestructura de la CDI realiza obras de agua potable y saneamiento y en su proceso considera la elaboración de estudios y proyectos con la finalidad de realizar las obras con la mayor eficiencia y calidad, con el fin de que la necesidad de agua potable y saneamiento sea atendida de manera exitosa. Dichos proyectos son aceptados por las autoridades de las comunidades. De igual forma se contempla el instrumento de contraloría social en el cual los beneficiarios pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos.

En consideración a que la atención a grupos vulnerables y a la población en situación de marginación es un tema prioritario para la CONAGUA, dentro del PROAGUA como población potencial a beneficiar, principalmente a los habitantes de localidades de alta o muy alta marginación y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Asimismo, las acciones por misma naturaleza benefician al conjunto de habitantes de cada localidad con un enfoque de equidad que incluyen a todos los habitantes con independencia de su condición social, edad, religión, origen étnico (indígena o afrodescendiente), discapacidad, preferencia sexual, género, filiación política o cualquier otra. Asimismo, dentro del *Apartado Rural*, la participación e integración activa de las mujeres en los comités comunitarios que tienen a su cargo la operación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento.

Con el objetivo de ofrecer los servicios de agua y saneamiento a la población rural de México que se encuentra en situación de mayor marginación, la CONAGUA implementó el PROCAPTAR. Este programa apoya a las comunidades situadas en sitios donde existen dificultades de índole técnica y económica para ser abastecidos mediante formas convencionales y que actualmente se tiene que trasladar grandes distancias para acceder al vital líquido

**Pregunta 26.** Sírvase describir las medidas adoptadas por el Gobierno para llevar a cabo investigaciones y remediar los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de desarrollo, las actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas, haciendo hincapié en la contaminación o la sobreexplotación de las fuentes de agua, particularmente cuando esas fuentes de agua se utilizan para abastecer a una o más comunidades.

**Respuesta 26.**

En cumplimiento del artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales relacionado con el monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua, la CONAGUA por medio de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua realiza la vigilancia sistemática del nivel de contaminantes específicos en el agua corriente, así como investigaciones sobre los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de desarrollo, las actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas y fertilizantes.

La Red Nacional de Monitoreo, la Red Nacional de Laboratorios y el Laboratorio Nacional de Referencia, con la colaboración de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, conforman la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA).

A partir del 2012, con el apoyo de un consorcio de laboratorios, acreditados por la Empresa Mexicana de Acreditamiento y aprobados por la CONAGUA, miden la calidad del agua cada año en 5,000 sitios distribuidos en el país en presas, lagos, ríos, zonas costeras y pozos, incluyendo humedales, áreas naturales protegidas, zonas turísticas, de explotación pesquera, fuentes de abastecimiento y áreas con impacto de actividades industriales y urbanas, entre otras. Para lo anterior, se determinan por tipo de cuerpo de agua hasta 40 parámetros de calidad del agua realizando al año en promedio, 18, 200 acciones de medición (monitoreo), correspondiendo a 1\*020,000 resultados analíticos con una inversión anual de $196’000,000.00

A partir de la información obtenida, en apego a la Ley de Aguas Nacionales sobre mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la calidad del agua, se elaboran dos tipos de diagnósticos de la calidad del agua.

El primero a través de un conjunto de indicadores, tanto para aguas superficiales como subterráneas.

El segundo de diagnóstico, que se diseña para los cuerpos de agua en los que existen sitios que los indicadores de calidad del agua califican como fuertemente contaminados, profundizando en las posibles fuentes de contaminación que provocan tal situación o llevando a cabo estudios de calidad del agua donde se obtiene una amplia caracterización de la problemática.

Esta información permite a las instancias competentes identificar la necesidad de establecer acciones o programas de saneamiento o control de lo contaminación del agua, orientados a restaurar la calidad de estos cuerpos de agua que muestran signos de deterioro; además de determinar la necesidad de rediseñar o, en su caso, ampliar la RENAMECA, así como identificar las descargas en las que se deben fijar condiciones particulares a las descargas de aguas residuales más estrictas que lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT- 1996 “Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales".

**Pregunta 27.** Sírvase describir las medidas tomadas por el Gobierno para responder a las preocupaciones enunciadas por varias organizaciones de la sociedad con respecto al proyecto propuesto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 5 de enero de 2018 “PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017: Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”.[[23]](#footnote-23)

**Respuesta 27.**

El Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales para quedar como Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, llamó la atención de la sociedad civil organizada, académicos y expertos en el tema debido a que no se garantiza un alto a la contaminación y que se revierta el deterioro en los cuerpos acuíferos.

Para atender las preocupaciones de la sociedad civil y expertos en el tema, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) a través del Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio[[24]](#footnote-24) (SIMIR) abrió el expediente 04/0097/201217[[25]](#footnote-25), en el cual se recibieron 40 recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas ambientales; las recomendaciones señalan que la actualización de la norma, lejos de mejorar la calidad de agua y establecer límites más estrictos para evitar la contaminación de los cuerpos hídricos, se abre la posibilidad para contaminar aún más.

Actualmente, la modificación a la norma se encuentra en proyecto[[26]](#footnote-26), debido, en gran medida, a las preocupaciones presentadas por la sociedad civil organizada, la academia y activistas ambientales. Durante la nueva administración 2018-2024, se dará seguimiento al proyecto de actualización de la norma a efecto de que se tomen en cuenta las recomendaciones emitidas por los diversos grupos de interés y la actualización corresponda a los parámetros internacionales.

**Pendiente.**

**Pregunta 28.** Se remite a diez decretos promulgados en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2018, por los cuales se suprimen las vedas sobre la explotación de las aguas de diez regiones hidrológicas, respectivamente, y se establecen zonas de reserva en su lugar.[[27]](#footnote-27) Sírvase describir las medidas tomadas para asegurar la participación adecuada de toda la población, incluida la población indígena, en el proceso de consulta relacionado a los diez decretos.

**Respuesta 28.**

La Ley de Aguas Nacionales señala que el Ejecutivo Federal, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, podrá decretar el establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de veda o declarar la reserva de aguas. Por su parte el reglamento de esta Ley señala que en los estudios técnicos referidos la CONAGUA promoverá la participación de los usuarios a través de los Consejos de Cuenca, o en su defecto, a través de las organizaciones de los usuarios en las zonas que se quieran vedar o reglamentar.

En cumplimiento a lo anterior, se llevaron a cabo estudios técnicos con base en los cuales se emitieron los decretos de reserva, los cuales fueron presentados a los usuarios y organizaciones de la sociedad en el seno de los Consejos de Cuenca, en observancia a los dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, para darlos a conocer, escuchar comentarios y sugerencias, requiriendo en algunos casos modificar el estudio y realizar dos o más sesiones para discusión.

Dichos decretos, que atendieron a las recomendaciones de los estudios técnicos, se sometieron a consulta pública, en términos del artículo 69-K de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establecía que la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria, haría públicos los anteproyectos, manifestaciones de impacto regulatorio, así como los dictámenes, autorizaciones y exenciones que emitiera, cuyo portal está habilitado para recibir comentarios y propuestas.

De manera particular, por lo que hace a la consulta indígena, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece en el artículo 6 que cada vez que los gobiernos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas deben consultarlos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas.

Debido a que los decretos de reserva se limitan a suprimir vedas en zonas con disponibilidad, establecerlas en las cuencas que lo requieren por su situación de déficit y establecer zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental, se considera que tales instrumentos no constituyen medidas que afecten directamente a los pueblos indígenas, por lo que no se requirió una consulta específica a dichas poblaciones.

Adicionalmente, es necesario aclarar que la afirmación que los Decretos “…*suprimen las vedas sobre la explotación de las aguas de diez regiones hidrológicas, respectivamente, y se establecen zonas de reserva en su lugar.*” es inexacta ya que la veda solo se suprime en 93 cuencas hidrológicas de las 274 que se involucran en los 10 Decretos señalados pues en las restantes 181 cuencas hidrológicas no existían vedas que limitarán o restringieran la explotación de las aguas. En un sentido más amplio, el volumen de agua disponible en las 93 cuencas en las cuales existía veda era de 21,228 millones de metros cúbicos mientras que en las 181 cuencas que no tenían veda el volumen disponible y factible de explotar sin ninguna restricción era de 166,485.341 millones de metros cúbicos. Con las reservas establecidas, si bien se levantan las vedas en 93 cuencas, queda protegido mediante reservas en las 274 cuencas un volumen total de 152,365.852 millones de metros cúbicos y solo disponible para concesionar 39,529.9 millones de metros cúbicos.



**Pregunta 29**. Sírvase describir las medidas tomadas por el Gobierno para mejorar los procesos por los cuales se asegura el suministro de agua potable de calidad, incluidos los esfuerzos de vigilancia del nivel de contaminantes específicos en el agua corriente.

La CONAGUA tiene a su cargo el programa federal de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; este programa se formula con especial enfoque multisectorial, para responder a las necesidades de los servicios públicos de agua potable, mediante el apoyo a la infraestructura y mejoramiento de las eficiencias, con ello, los Organismos Operadores puedan ofrecer un servicio con eficiencia y calidad.

Dentro del contenido de **e**ste programa, se da énfasis a acciones para asegurar el suministro de agua potable, para fomentar y apoyar el desarrollo de acciones (cuando es el caso) para la remoción de contaminantes específicos, en los sistemas de abastecimiento y distribución del agua en las entidades federativas del país.

Otro apartado son los casos de excepción, cuando la CONAGUA determina que existe riesgo urgente para la salud o para la integridad de los habitantes, la localidad o municipio es tratado como caso de excepción. La causa puede ser, por ejemplo el incremento súbito de elementos o contaminantes tóxicos; por arriba de la norma oficial mexicana correspondiente, entonces podrá apoyar acciones que incluyan la potabilización en el punto de entrega con recursos económicos federales hasta 100%.

La CONAGUA para el monitoreo de la calidad de las aguas nacionales, tiene a su cargo la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua; con este programa se conoce la calidad del agua en fuentes subterráneas y superficiales; cuando se detectan concentraciones de contaminantes que exceden la normatividad, se procede a informar a las diferentes instancias de los gobiernos estatales y municipales, para que adopten las medidas pertinentes en sus sistemas de distribución.

Como ya se mencionó anteriormente, las autoridades sanitarias (Secretaría de Salud) de nuestro país establecen las normas, toman las medidas y realizan las actividades tendientes a la protección de la salud humana que incluye la emisión de las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el agua para uso y consumo humano; así como vigilar y certificar su calidad una vez potabilizada.

**Pregunta 30.** Sírvase describir las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar y fortalecer la aplicación del marco regulador y normativo sobre el acceso a la información, la participación y la consulta previa, libre e informada para asegurar la participación de la población, incluidas las comunidades indígenas y las comunidades rurales dispersas, en los procesos de planificación, aplicación y seguimiento.

**Respuesta 30.**

El Estado mexicano está obligado para dotar a la población de los servicios básicos (incluida la población indígena), de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Desarrollo Social.

Con base en la Ley de Planeación, el Estado Mexicano establece en sus documentos rectores de la política federal (Plan Nacional de Desarrollo) la estrategia y las prioridades de atención para dotar de servicios básicos como el agua y drenaje. La formulación del Plan Nacional de Desarrollo conlleva la realización de una consulta de opinión a la población nacional donde se incluye una consulta específica a la población indígena.

La consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la actual Administración Federal se llevó a cabo en 2013 y de acuerdo a la normatividad vigente se deberá realizar en 2019 la que corresponda a la Administración Federal para el sexenio 2019-2024.

Por su parte, la CONAGUA**,** dentro del apartado rural del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA, mediante las actividades de la atención social y participación comunitaria implementan estrategias para llevar a cabo acciones que identifiquen prácticas culturales y el conocimiento local asociado con la fuente de agua y el saneamiento, particularmente cuando los beneficiarios sean mayoritariamente comunidades indígenas. Se promueve la constitución de comités para interactuar con la comunidad respectando sus usos y costumbres mediante pláticas comunitarias.

El derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental reconocida en el artículo segundo de la Constitución Política y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, cuya protección puede invocar cualquier miembro de una comunidad o pueblo indígena, para hacer exigibles sus derechos.

Para poner en práctica dicho marco, se cuenta con el “Protocolo para la implementación de consulta a pueblos y comunidades indígenas diseñado de conformidad con estándares del Convenio 169 de la OIT” y el “Acuerdo por el que se determinan los supuestos de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, por acciones y/o proyectos que realice la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,” documentos que fungen como guía para la realización de los procesos de consulta en el país.

De igual forma, **se reconoce el derecho a la consulta** en las siguientes leyes:

* Ley de Planeación.
* Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
* Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
* Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
* Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
* Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Con las reformas estructurales de 2013 se incluyó el derecho a la consulta en las siguientes leyes:

* Ley de Hidrocarburos.
* Ley de la Industria Eléctrica.
* Ley de Energía Geotérmica.

En marzo de 2017, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se determinan los supuestos de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas[[28]](#footnote-28), por acciones y/o proyectos que realice la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como su sector coordinado y agrupado.

La Secretaría de Energía (SENER), conforme a los artículos 120 de la Ley de Hidrocarburos y 119 de la Ley de la Industria Eléctrica cuenta con un mecanismo específico de diálogo con comunidades y pueblos indígenas, consistente en la consulta previa respecto a la Evaluación de Impacto Social, la cual debe solicitarse antes de obtener un permiso o autorización en ambas leyes.

El procedimiento de consulta previa depende de diversos factores, tales como la capacidad operativa de la unidad encargada de los procedimientos de evaluación de impacto social y consulta previa, a fin de que la consulta inicie de forma inmediata a la emisión del resolutivo de la Evaluación de Impacto Social, cuando de éste se desprenda que existe obligación de consulta previa.

Algunos de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia:

* *Comunidades y pueblos indígenas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses.* (Tesis aislada. Primera Sala. Registro: 2004170)
* Consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe.
* *Pueblos y comunidades indígenas. Derecho a ser consultados. Requisitos esenciales para su cumplimiento*. (Tesis: Aislada. Segunda Sala. Registro: 2011956) a) previa al acto, durante la fase de planificación del proyecto; b) culturalmente adecuada, respetar sus costumbres y tradiciones, métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones; c) informada, información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto; y d) de buena fe, ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización o aquiescencia.
* *Comunidades y pueblos indígenas. Cualquiera de sus integrantes puede promover juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales colectivos.* (Tipo de Tesis: Aislada. Instancia: Primera Sala. Registro: 2004169)
* *Pueblos y comunidades indígenas. Derecho a ser consultados. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas es la autoridad competente en la materia.* (Tesis: Aislada. Segunda Sala. Registro: 2011955)
* *Pueblos y comunidades indígenas. En su derecho a ser consultados, el estándar de impacto significativo constituye elemento esencial para que proceda*. (Tesis Aislada. Segunda Sala. Registro: 2011957)…situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) el posible reasentamiento; 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 6) la desorganización social y comunitaria; y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, las autoridades deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en las condiciones de vida y entorno de los pueblos indígenas.

La SCJN además de su labor jurisdiccional, trabaja en la difusión y promoción de los derechos humanos[[29]](#footnote-29) convencida de que la educación y formación en derechos humanos no sólo de las y los juzgadores, sino de la sociedad en general es la vía idónea para poner en práctica la reforma y garantizar su permanencia y progresividad.

**Pregunta 31.** Sírvase describir las medidas tomadas por el Gobierno para fortalecer la capacidad de acceso, de todas las personas afectadas, a remedios por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento mediante mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales. A este respecto, sírvase describir cualquier medida tomada para asegurar que la información sobre esos mecanismos sea transparente y esté a disposición de todos y que, de ser necesario, se proporcione asistencia jurídica o de otro tipo.

**Respuesta 31.**

El Estado mexicano cuenta con mecanismos encaminados a garantizar el derecho humano al agua, a través del fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los servicios públicos respectivos, mediante el apoyo a las instancias estatales y municipales responsables de su prestación.

Lo anterior obedece al mandato constitucional dirigido a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, con lo que se reconoce de manera expresa el Principio *pro homine*.

En este sentido, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

**Pregunta 32.** Sírvase describir cualquier medida tomada para asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y para garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica.

**Respuesta 32.**

El Artículo 9° constitucional señala que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

El Art. 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales señala que toda persona, grupos sociales, organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, asociaciones y sociedades, podrán recurrir a la denuncia popular en los términos del Capítulo VII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuando se cometan actos que produzcan o puedan producir desequilibrios o daños a los recursos hídricos o sus bienes inherentes.

**Pregunta 33.** Sírvase describir cualquier medida tomada o esfuerzo que se ha hecho para ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

**Respuesta 33.**

La ratificación de los tratados está sujeta al procedimiento previsto en la Constitución y la Ley sobre la Celebración de Tratados (firma del presidente, con aprobación del Senado, siempre que el tratado esté de acuerdo con la Constitución mexicana) previas consultas internas con las instituciones nacionales competentes en la materia.

Asimismo, el marco jurídico nacional fue reformado en 2011 de forma tal que los derechos consagrados en tratados internacionales de los que México es Parte, gozan de jerarquía constitucional. En tal sentido, todas las autoridades deben interpretar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, a la luz del principio “pro persona”, favoreciendo en todo momento la interpretación de la norma que brinde la mayor protección al individuo.

Lo anterior obliga a realizar un análisis exhaustivo del impacto legislativo que implique la ratificación y posterior implementación de tratados internacionales.

En sentido, actualmente se realizan las consultas de ley con las instituciones competentes para verificar la posibilidad de implementar los tratados referidos, a la luz del marco jurídico nacional.

**Pregunta 34.** Sírvase describir las medidas adoptadas por el Gobierno de México y los de países vecinos para intensificar sus relaciones de cooperación existentes en la esfera del agua y el saneamiento, incluso por el intercambio de buenas prácticas y asistencia técnica.

**Respuesta 34.**

La CONAGUA publicó en junio de 2017, el informe “Acceso al agua y saneamiento: análisis del marco legal mexicano desde una perspectiva de los derechos humanos”, trabajo realizado por WaterLex con la colaboración de White & Case LLP (firma de abogados).

Se culminó el proyecto Saneamiento de las zonas marginadas del valle de la Sabana del estado de Guerrero, con el apoyo del gobierno Español, que calificó a este proyecto como el más exitoso en América Latina, ejemplo de buenas prácticas.

Se colabora con el BID en el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales.

Se trabaja con la cooperación internacional alemana GIZ en temas de tratamiento y rehúso de agua en el marco de una cooperación triangular con Bolivia.

Algunos ejemplos de la colaboración que se ha llevado a cabo durante 2018 son:

* Participación en seminarios sobre los Planes de Seguridad del Agua y Planes de Seguridad del Saneamiento, respectivamente, organizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En este rubro, destacando la elaboración de algunos planes en el estado de Chiapas.
* En colaboración con la OPS, se trabajó en la determinación de las líneas base de los indicadores 6.1.1, 6.2.1 y 6.3.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 6 (ODS6). Estos trabajos incluyeron la realización de múltiples talleres que contaron con la participación de la Presidencia de la República, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Salud (SALUD), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), BID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Mundial (BM) y otros, además de las diversas áreas técnicas de la CONAGUA.
* Adicionalmente se participó en diversos seminarios web organizados por las agencias custodias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para compartir experiencias relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 6.
* En el marco de la cooperación trilateral con Alemania y Bolivia, se inició un nuevo proyecto denominado Desarrollo de Capacidades para la Gestión Eficiente de Recursos Hídricos en Presas Multipropósito, cuyo objetivo es asesorar a personal técnico de Bolivia vinculado a proyectos de sistemas de presas multipropósito y proporcionar conocimientos y herramientas técnicas para planificar y gestionar el agua para diferentes usos.
* La CONAGUA asesora al Ministerio de Salud de Panamá a fin de elaborar un diagnóstico del Sistema de Calidad de Laboratorios y capacitación de personal panameño; desarrollo de un documento de políticas, procesos y procedimientos sobre Sistemas de Calidad; y apoyo en el proceso de certificación de Sistemas de Calidad de Laboratorios.
* Con la Agencia Nacional de Aguas (ANA) de Brasil en el marco del proyecto “Herramientas para la Planeación, Difusión y Gestión Informativa de los Recursos Hídricos”, se realiza el intercambio de información y experiencias sobre eficiencias de los procesos de integración de datos para la generación de información para efectos de planeación y difusión.
* Con el gobierno de Chile, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), se implementa el proyecto “Traspaso e intercambio de conocimientos, estrategias y acciones desarrolladas por Chile y México”, para afrontar los efectos de la escasez hídrica en los servicios de agua potable”.
* Continúan las actividades en el marco del proyecto de cooperación trilateral México-Alemania-Bolivia “Gestión integrada del agua para el saneamiento de la cuenca del río Rocha”; y con la cooperación técnica de Francia, se lleva a cabo el proyecto “Apoyo técnico para la Consolidación de la Comisión Metropolitana de Drenaje del Valle de México”.
* En la escena multilateral, en 2018 el Panel de Alto Nivel del Agua (HLPW) copresidido por México, encabezado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial e integrado por Islas Mauricio (Copresidente); Australia; Bangladesh; Hungría; Jordania; Países Bajos; Perú; Senegal; Sudáfrica; y Tayikistán presentó sus resultados; éstos corresponden a una serie de recomendaciones que se traducen en el desarrollo y puesta en marcha de políticas públicas a nivel nacional, contribuyendo así al logro del Objetivo de Desarrollo Sustentable 6.

1. Comisión de Agua Potable y Saneamiento, “Borrador del articulado para el proyecto de iniciativa Ley General de Aguas”, 26 de noviembre de 2017: <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/98022/491015/file/Propuesta%20del%20articulado%20co> mpleto.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. Iniciativas presentadas en el segundo periodo ordinario del tercer año de la LXII Legislatura: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Iniciativas/62/gp62_a3segundo.html> [↑](#footnote-ref-2)
3. Iniciativas presentadas en el primer periodo ordinario del primer año de la LXIII Legislatura: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Iniciativas/63/gp63_a1primero.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, *Propuesta general 1/2015 sobre el derecho al agua y el saneamiento*, CDHDF, 2015, disponible en <http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/06/propuesta-general-agua.pdf>, página consultada el 18 de enero de 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dichos convenios se concluyeron entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales de: Quintana Roo (el 8 de mayo de 2017); Oaxaca (el 9 de mayo de 2017); Durango (el 25 de mayo de 2017); Aguascalientes (el 28 de agosto de 2017); Zacatecas (el 6 de marzo de 2018); Colima (el 2 de abril de 2018); y Sinaloa (el 16 de julio de 2018); puede acceder al texto de dichos convenios en <http://dof.gob.mx/index.php>, o a través de los hipervínculos de los nombres de los convenios situados arriba. [↑](#footnote-ref-5)
6. Presupuesto de Egresos 2017 <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Presupuesto de Egresos 2018 <file:///D:/Users/ssddh09/Downloads/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202017.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. Disponible en: <https://www.gob.mx/conagua/documentos/guia-de-politicas-publicas-en-el-ambito-estatal-en-materia-de-agua-potable-y-saneamiento> [↑](#footnote-ref-8)
9. Diario Oficial de la Federación “REGLAS de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286203/Reglas_de_Operaci_n_2018.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. Diario Oficial de la Federación “REGLAS de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018.”30 de diciembre de 2017. <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509785&fecha=30/12/2017> [↑](#footnote-ref-10)
11. Diario Oficial de la Federación. “Acuerdo por el que se adiciona un indicador clave en materia de agua al catálogo nacional de indicadores”, 19 de octubre de 2017. http://dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5501789&fecha=19/10/2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibíd., p. 65. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ley De Agua Para El Estado De Aguascalientes <http://ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Aguascalientes/wo18642.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Ley De Agua Para El Estado De Aguascalientes [reforma Noviembre 2017 <http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-ags/AGS-L-Agua2017_11.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/documentos/guia-de-politicas-publicas-en-el-ambito-estatal-en-materia-de-agua-potable-y-saneamiento [↑](#footnote-ref-15)
16. Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/documentos/identificacion-de-costos-para-la-sostenibilidad-de-los-organismos-operadores-de-agua [↑](#footnote-ref-16)
17. Secretaría de Gobernación. V. Repatriación de mexicanos, 2018. <http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA> [↑](#footnote-ref-17)
18. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, *Constitución Política de la Ciudad de México*, Jefatura de Gobierno, 05 de febrero de 2017, disponible en disponible en <<http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176.pdf>>, página consultada el 18 de enero de 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. Disponible en: <https://www.gob.mx/conagua/documentos/guia-de-politicas-publicas-en-el-ambito-estatal-en-materia-de-agua-potable-y-saneamiento> [↑](#footnote-ref-19)
20. El Presupuesto 2018 favorece los megaproyectos hídricos, y no a los dueños del agua, reclaman <http://www.sinembargo.mx/10-11-2017/3348296> [↑](#footnote-ref-20)
21. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. “Reporte que presenta la CDHDF sobre la situación de las mujeres en la Ciudad de México al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el marco de la Novena Comparecencia del Estado mexicano,” 2 de octubre de 2017. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT\_CEDAW\_IFN\_MEX\_29106\_S.pdf [↑](#footnote-ref-21)
22. Disponible en: <https://www.gob.mx/conagua/documentos/guia-de-politicas-publicas-en-el-ambito-estatal-en-materia-de-agua-potable-y-saneamiento> [↑](#footnote-ref-22)
23. “Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales para quedar como proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación”, 5 de enero de 2018, Diario Oficial de la Federación. http://dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5510140&fecha=05/01/2018 [↑](#footnote-ref-23)
24. La Manifestación de Impacto Regulatorio es un instrumento que analiza la emisión de regulaciones nuevas a nivel local. [↑](#footnote-ref-24)
25. El expediente completo se puede consultar en: [www.cofersimir.gob.mx/expedientes/21218](http://www.cofersimir.gob.mx/expedientes/21218) [↑](#footnote-ref-25)
26. El proyecto de modificación se encuentra disponible en: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510140&fecha=05/01/2018> [↑](#footnote-ref-26)
27. Organizaciones de la sociedad civil, “Posicionamiento de la sociedad civil en relación al proyecto de la Norma Ambiental NOM-001-SEMARNAT-2017”, 6 de marzo 2018. Consultado el 18 de septiembre de 2018. https://[www.uccs.mx/article.php?story=posicionamiento-de-la-sociedad-civil-en-relacion-al-proyecto-de-la-norma-](http://www.uccs.mx/article.php?story=posicionamiento-de-la-sociedad-civil-en-relacion-al-proyecto-de-la-norma-) ambiental-nom-001-semarnat-2017 [↑](#footnote-ref-27)
28. Surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; regularización de la propiedad; proyectos de desarrollo urbano, control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país; infraestructura de comunicaciones y de servicios;programas de conservación de tierras y aguas comprendidas en los pueblos y comunidades indígenas; acciones sobre los terrenos baldíos y nacionales para su óptimo aprovechamiento;programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales; procedimientos de expropiación por causa de utilidad pública; regularización del suelo; **l)** Cuando expropiaciones, ocupaciones previas y contraprestaciones; [↑](#footnote-ref-28)
29. A través de diversos medios como: publicaciones, investigaciones, conversatorios, círculos de derechos, programas de televisión con temas específicos de derechos humanos, actividades de capacitación, formación y especialización. [↑](#footnote-ref-29)